

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-2993/15)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TÍTULO I Disposiciones generales CAPÍTULO 1 Ámbito y presunción

ARTÍCULO 1°.- Los honorarios de los abogados y procuradores que por su actividad judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación actúen como patrocinantes o representantes, o auxiliares de la justicia, respecto de asuntos cuya competencia correspondiere a la Justicia Nacional o Federal, se regularán de acuerdo con esta Ley. Asimismo, estas normas se aplicarán para la regulación de los honorarios de los demás auxiliares de la justicia con respecto a su actuación en los asuntos referidos en el párrafo primero, excepto lo que con relación a ello dispongan las leyes especiales. La presente ley es de orden público.

ARTÍCULO 2°.- Los profesionales que actúen en calidad de abogados para su cliente y hayan sido contratados en forma permanente, con asignación fija, mensual, o en relación de dependencia, no podrán invocar esta ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o si mediare condena en costas a la parte contraria o de terceros ajenos a la relación contractual.

ARTÍCULO 3°.- La actividad profesional de los abogados y procuradores y de los auxiliares de la justicia se presume de carácter oneroso, salvo en los casos en que conforme excepciones legales pudieren o debieren actuar gratuitamente. Los honorarios gozan de privilegio general, revisten carácter alimentario y en consecuencia son personalísimos, embargables hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto que supere el salario mínimo, vital y móvil, excepto deudas alimentarias y de litis expensas. Los honorarios serán de propiedad exclusiva del profesional que los hubiere devengado.

CAPÍTULO 2 Contrato de honorarios y pacto de cuotalitis

ARTÍCULO 4°.- Los abogados y procuradores podrán pactar con sus clientes, en todo tipo de casos, el monto de sus honorarios sin otra sujeción que a esta ley y al Código Civil y Comercial de la Nación. El contrato se efectivizará por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del propio documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago de honorarios.

Los convenios de honorarios sólo tienen efecto entre partes y sus relaciones se rigen con prescindencia de la condenación en costas que correspondiere abonar a la parte contraria.

ARTÍCULO 5°.- La renuncia anticipada de honorarios y el pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel fijado por esta ley serán nulos de nulidad absoluta, excepto si se pactare con ascendientes y descendientes en línea recta, cónyuge, conviviente o hermanos del profesional, o si se tratare de actividades pro bono u otras análogas previstas en la normativa vigente.

El profesional que hubiere renunciado anticipadamente a sus honorarios o convenido un monto inferior al previsto en esta ley incurrirá en falta de ética. Igual situación se configurará en el caso del profesional que, habiendo ejercido esa conducta, reclamare el pago de honorarios u honorarios superiores a los pactados. Ante estos supuestos intervendrá, aun de oficio, el Tribunal de Disciplina correspondiente a la jurisdicción.

ARTÍCULO 6°.- Los abogados y procuradores podrán celebrar con sus clientes pacto de cuotalitis, por su actividad en uno o más procesos, en todo tipo de casos, con sujeción a las siguientes reglas:

- a) se redactará, antes o después de iniciado el juicio, por escrito con tantos ejemplares como partes hubiera;
- b) no podrá exceder del TREINTA POR CIENTO (30%) del resultado del pleito, cualquiera fuese el número de pactos celebrados e independientemente del número de profesionales intervinientes. Sólo podrá ser superior a ese porcentaje para el caso que el profesional tome a su cargo expresamente los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas, en cuyo caso, el pacto podrá extenderse hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del resultado líquido del juicio;
- c) en los asuntos previsionales, de alimentos y con la intervención de menores de edad que actúen con representante legal, los honorarios del profesional pactado no podrán superar el VEINTE POR CIENTO (20%);
- d) los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria corresponderán exclusivamente a los profesionales, sin perjuicio de lo acordado con el cliente;
- e) el pacto podrá ser presentado por el profesional o por el cliente en el juicio a que el mismo se refiere. En cualquier momento, podrán requerir su homologación judicial;

- f) será nulo el contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por abogados o procuradores inscriptos, al tiempo de convenirlos, en la matrícula respectiva;
- g) en los asuntos laborales se aplica lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744;
- h) la revocación del poder o patrocinio no anulará el contrato de honorarios, salvo que aquélla hubiese sido motivada por culpa del abogado o procurador fehacientemente determinada por autoridad competente, en cuyo caso conservará el derecho a la regulación judicial, si correspondiere;
- i) el profesional que hubiere celebrado contrato de honorarios y comenzado sus gestiones, puede apartarse del juicio, en cualquier momento. En tal caso quedará sin efecto el contrato, salvo pacto en contrario, sus honorarios se regularán judicialmente, para lo cual se tendrá en cuenta el monto del juicio, los términos del convenio y eventualmente el resultado del proceso;
- j) se podrán celebrar libremente, entre cliente y abogado, convenios de honorarios exclusivamente para determinar las retribuciones de aquellas tareas de asesoramiento profesional extrajudicial, en cuyo caso las pautas establecidas en la presente Ley serán de aplicación supletoria.

ARTÍCULO 7°.- El recibo de honorarios con imputación precisa del asunto, de fecha anterior a la conclusión de la gestión profesional, se considera como pago a cuenta del que corresponda según el arancel.

ARTÍCULO 8°.- La institución que en la jurisdicción respectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula de abogados o procuradores, registrará a pedido de parte, los contratos de honorarios y pactos de cuotalitis.

ARTÍCULO 9°.- Es nulo de nulidad absoluta el contrato sobre participación de honorarios entre un abogado o procurador matriculado y otra persona que carezca de dichos títulos expedidos por autoridad competente. Se exceptúa de lo anterior a los honorarios del letrado patrocinante del síndico concursal, en cuyo caso se admiten acuerdos entre los profesionales actuantes.

ARTÍCULO 10.- En caso de que se demanden honorarios convenidos provenientes de la labor profesional, se procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, acompañando al efecto la documentación que acredite la labor profesional y el convenio suscripto por el obligado. Ello no será necesario si sus firmas fuesen certificadas o el convenio se encontrare registrado ante la institución que en la jurisdicción respectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula de abogados o procuradores. La actuación judicial prevista en el primer párrafo, no devengará tasa judicial, sellado, ni impuesto alguno.

TÍTULO II
Naturaleza jurídica y modalidades del pago de honorarios
CAPÍTULO 1
Obligación del pago del honorario

ARTÍCULO 11.- Los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o procurador matriculado y de los auxiliares de la justicia. Ningún asunto que haya demandado actividad profesional judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación, podrá considerarse concluido sin previo pago de los honorarios, y no se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier otra medida cautelar, ni se hará entrega de fondos o valores depositados, inscripciones, o cualquier otra gestión que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hayan cancelado los mismos o se contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado en la institución de matriculación pertinente. Se deberá también dar cumplimiento a las normativas previsionales y de seguridad social para abogados y procuradores, vigentes en cada Provincia.

Si de lo actuado surge la gestión profesional, los tribunales o reparticiones administrativas donde se realizó el trámite deberán exigir la constancia de pago de los honorarios o la conformidad expresa o el silencio del profesional notificado de conformidad con el párrafo precedente. En caso de urgencia, bastará acreditar que se ha afianzado su pago y notificado en forma fehaciente al profesional interesado.

Es obligación del magistrado interviniente velar por el fiel cumplimiento de la presente norma.

En ningún caso, el convenio celebrado con posterioridad será oponible a los profesionales que hubieren intervenido en el proceso y no hayan participado del acuerdo. Tampoco podrá ser homologado judicialmente.

Respecto a los auxiliares de la justicia, los jueces no podrán devolver exhortos u oficios entre jueces o tribunales de distinta jurisdicción, sin previa citación de los mismos, si el pago de sus honorarios no ha sido acreditado en autos, a menos que el interesado expresase su conformidad, o que se afianzara su pago con garantía real suficiente.

ARTÍCULO 12.- La obligación de pagar honorarios por trabajo profesional, en principio pesa solidariamente sobre los condenados en costas u obligados al pago, pudiendo el profesional exigir y perseguir el pago total o parcial, a su elección, de todos o de cualquiera de ellos. Los honorarios de los auxiliares de la justicia designados de oficio serán exigibles a cualquiera de las partes litigantes o terceros citados en garantía, sin perjuicio del derecho de repetición que tendrá la parte que haya pagado contra la condenada en costas.

ARTÍCULO 13.- Si un profesional se aparta de un proceso o gestión antes de su conclusión normal, puede solicitar regulación provisoria de honorarios, los que se fijarán en el mínimo que le hubiere podido corresponder conforme a las actuaciones cumplidas. También podrá pedir regulación de honorarios definitiva, si la causa estuviere sin tramitación por más de UN (1) año por causas ajenas a su voluntad, o en el caso de los auxiliares de la justicia, incluyendo a los peritos de parte o consultores técnicos, si transcurriera dicho plazo desde la finalización de su labor en la causa. El pago de los honorarios regulados estará a cargo de la parte a quien el peticionario representó o patrocinó o, en el caso de los auxiliares de la justicia, requirió su actuación, la que en su caso, tendrá, oportunamente, facultad de repetir de conformidad con el resultado sobre las costas.

CAPÍTULO 2

Principios generales sobre honorarios

ARTÍCULO 14.- El abogado o procurador en causa propia podrá cobrar sus honorarios y gastos si su contrario resultare condenado en costas.

ARTÍCULO 15.- En caso de que en el juicio intervenga más de un abogado o procurador por una misma parte se considerará a los efectos arancelarios como un solo patrocinio o representación y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno.

Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado, los honorarios se regularán considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado.

ARTÍCULO 16.- La regulación judicial de honorarios profesionales deberá fundarse y hacerse con citación de la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad. La mera mención del articulado de esta Ley no será considerada fundamento válido. El profesional, al momento de solicitar regulación de honorarios, podrá clasificar sus tareas con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, debiendo el juez tener especial atención a la misma y en caso de discordancia de criterio deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el presente artículo. La sentencia que pone fin al pleito deberá contenerla regulación de los profesionales intervinientes.

ARTÍCULO 17.- Para regular los honorarios de los profesionales intervinientes se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) el monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria;
- b) el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada;
- c) la complejidad y novedad de la cuestión planteada;

- d) la responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera haberse derivado para el profesional;
- e) el resultado obtenido;
- f) la probable trascendencia de la resolución a que se llegare, para futuros casos;
- g) la trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate.

En el caso de los auxiliares de la justicia se considerarán también los informes presentados y su calidad técnica o científica, así como la naturaleza de las diligencias practicadas. En ningún caso podrán los jueces apartarse de los mínimos establecidos en la presente ley, los cuales revisten carácter de orden público.

ARTÍCULO 18.- En los casos de cambio de patrocinio o representación, el profesional podrá actuar como parte o peticionario en protección de sus derechos referentes a la regulación de sus honorarios, si no la hubiere solicitado; a la regulación adicional a la que tenga derecho de acuerdo al resultado del pleito; o a la ejecución del pacto celebrado con su cliente en los términos de lo establecido en los artículos 4°, 5° y 6° de la presente ley.

ARTÍCULO 19.- Los que sin ser condenados en costas abonaren honorarios profesionales, serán subrogantes legales del crédito respectivo. Podrán repetir de quien corresponda la cantidad abonada, por las mismas vías y con el mismo sistema fijado para los profesionales en la presente Ley.

TÍTULO III

Regulación de honorarios a los profesionales

CAPÍTULO 1

Honorarios mínimos arancelarios

ARTÍCULO 20.- Institúyese la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) para los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la justicia, la que equivaldrá al UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) de la remuneración total asignada al cargo de juez federal de primera instancia, entendiéndose por tal la suma de todos los rubros, sea cual fuere su denominación, incluida la bonificación equivalente a SEIS (6) años de antigüedad. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN suministrará y publicará mensualmente, en un lugar a determinar por dicho Alto Tribunal, el valor resultante, eliminando las fracciones decimales, e informará a las diferentes cámaras el valor de la UMA.

Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en las disposiciones siguientes, los honorarios mínimos que correspondan percibir a los

abogados, procuradores y auxiliares de la justicia por su actividad profesional, resultarán de la cantidad de UMA que se detallan en las siguientes tablas:

a) honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria	UMA
Divorcio	10
Acción sobre efectos del divorcio y responsabilidad parental	25
Adopción	20
Tutela	20
Restricciones a la capacidad e inhabilitación	25
Reclamación e impugnación de filiación	25
Acciones de estado de familia	25
Veeduría	10
Información sumaria	2
Trámite administrativo ante autoridad de aplicación	2
Trámite ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA	3
Presentación de denuncias penales con firma del letrado	8
Incidente de excarcelación o exención de prisión o audiencia de control de detención o medidas de coerción	10
Pedido y audiencia de suspensión de juicio a prueba	10
Acta de juicio abreviado	15
Actuación hasta la clausura de la instrucción o de control de la acusación	15
Actuación desde la clausura de la instrucción o de control de la acusación hasta la sentencia	20
Acción de incidencia colectiva, habeas corpus, habeas data	25
b) honorarios mínimos por la labor extrajudicial	UMA
Consultas verbales	0,5
Consultas con informe	1
Redacción de cartas documento	1
Estudio o información de actuaciones judiciales o administrativas	1,5
Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos	1,5
Redacción de contratos de locación: del 1% al 5% del valor del contrato, con un mínimo de	2
Redacción de boleto de compra venta: del 1% al 5% del valor del mismo, con un mínimo de	3
Redacción de contrato o estatuto de sociedades comerciales, asociaciones o fundaciones y constitución de personas jurídicas en general: del 1% al 3% del capital social, con un mínimo de	5
Redacción de otros contratos: del 0,3% al 5% del valor de los mismos, con un mínimo de:	2
Arreglo extrajudicial: desde el 50% de las escalas fijadas para los mismos, con un mínimo de	1
Para gastos administrativos de estudio para iniciación de juicios	0,5
Redacción de denuncia penal (sin firma de letrado)	3
Asistencia a una audiencia de mediación o conciliación	2

CAPÍTULO 2

Forma de regular los honorarios profesionales procuradores

ARTÍCULO 21.- Los honorarios de los procuradores se fijarán en un CUARENTA POR CIENTO (40%) de los que por esta ley corresponda fijar a los abogados patrocinantes. Si el abogado actuare en carácter

de apoderado sin patrocinio, percibirá la asignación total que hubiere correspondido a ambos.

ARTÍCULO 22.- En los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria los honorarios por la defensa de cada una de las partes serán fijados según la cuantía de los mismos, de acuerdo con la siguiente escala:

Escala	%
Hasta 15 UMA	del 22% al 33%
De 16 UMA a 45 UMA	del 20% al 26%
De 46 UMA a 90 UMA	del 18% al 24%
De 91 UMA a 150 UMA	del 17% al 22%
De 151 UMA a 450 UMA	del 15% al 20%
De 451 UMA a 750 UMA	del 13% al 17%
De 751 UMA en adelante	del 12% al 15%

En ningún caso los honorarios podrán ser inferiores al máximo del grado inmediato anterior de la escala, con más el incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponde al grado siguiente.

Si hubiera litisconsorcio la regulación se hará con relación al interés de cada litisconsorte. En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, se considerará que hay UNA (1) sola parte.

En el caso de los auxiliares de la justicia, el monto de los honorarios a regular no podrá ser inferior al CINCO POR CIENTO (5%) ni superior al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del proceso.

En todos los casos, si no existiera susceptibilidad de apreciación pecuniaria, para la regulación de honorarios se aplicarán las pautas de valoración del artículo 17.

Las normas precedentes, así como las demás que se incluyen en la presente Ley, en cuanto hace a los peritos de parte y a los consultores técnicos, les serán de aplicación del mismo modo que a los peritos designados de oficio, salvo lo dispuesto en el artículo 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 23.- En los juicios por cobro de sumas de dinero, a los fines de la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, la cuantía del asunto será el monto de la demanda o reconvención; o el de la liquidación que resulte de la sentencia, si correspondiere actualizado por intereses.

Si fuere íntegramente desestimada la demanda o la reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia, si ello correspondiere, disminuido en un TREINTA POR CIENTO (30%), o, en los procesos de monto indeterminado, según la pericia contable, si existiere.

ARTÍCULO 24.- El monto de los procesos en caso de que existan bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, se determinará conforme lo siguiente:

- a) si se trata de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos y no han sido tasados en autos, se tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal al momento en que se practique la regulación, incrementada en un CINCUENTA POR CIENTO (50%). No obstante reputándose ésta inadecuada al valor real del inmueble, el profesional estimará el valor que le asigne, de lo que se dará traslado. En caso de oposición, el juez designará perito tasador. De la pericia se correrá traslado por CINCO (5) días. Si el valor que asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que el del valor fiscal o el que hubiere propuesto el obligado, las costas de la pericia serán soportadas por este último; de lo contrario, serán a cargo del profesional. Este procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en el principal, difiriéndose la regulación de honorarios;
- b) si se trata de bienes muebles y semovientes, se tomará como cuantía del asunto el valor que surja de autos, sin perjuicio de efectuarse la determinación establecida en el inciso a);
- c) si se trata del cobro de sumas de dinero proveniente de obligaciones de tracto sucesivo se tendrá como valor del pleito el total de lo reclamado, más sus accesorios, hasta el momento del efectivo pago;
- d) si se trata de derechos crediticios, se tomará como cuantía del asunto el valor consignado en las escrituras o documentos respectivos, deducidas las amortizaciones normales previstas en los mismos, o las extraordinarias que justifique el interesado;
- e) si se trata de títulos de renta y acciones de entidades privadas, se tomará como cuantía del asunto el valor de cotización de la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES; si no cotizara en bolsa, el valor que informe cualquier entidad bancaria oficial; si por esta vía fuere imposible lograr la determinación, se aplicará el procedimiento del inciso a);
- f) si se trata de establecimientos comerciales, industriales o mineros, se valuará el activo conforme las normas de los incisos de este artículo; se descontará el pasivo justificado por certificación contable u otro medio idóneo en caso de que no se lleve la contabilidad en legal forma, y al líquido que resulte se le sumará un DIEZ POR CIENTO (10%) que será computado como valor llave;
- g) si se trata de dinero, crédito u obligaciones expresados en moneda extranjera o metálico, se estará al valor de plaza conforme al tipo de cambio vendedor minorista al público que establezca el Banco de la Nación Argentina; el profesional podrá exigir que se cancelen sus honorarios en moneda nacional de curso legal en cantidad necesaria para su cancelación o en la moneda extranjera de que se trate;
- h) si se trata de usufructo o nuda propiedad, se determinará el valor de los bienes conforme el inciso a) de este artículo;

- i) si se trata de uso y habitación, será valuado en el DIEZ POR CIENTO (10%) anual del valor del bien respectivo, justipreciado según las reglas del inciso a) y el resultado se multiplicará por el número de años por el que se transmite el derecho, no pudiendo exceder en ningún caso del CIENTO POR CIENTO (100%) de aquél;
- j) si se trata de bienes sujetos a agotamiento, minas, canteras y similares, se determinará el valor por el procedimiento previsto en el inciso b) del presente artículo;
- k) si se trata de concesiones, derechos intelectuales, marcas, patentes y privilegios, se seguirán las mismas normas del inciso b).

ARTÍCULO 25.- A efectos de la regulación de honorarios, se tendrán en cuenta los intereses que deban calcularse sobre el monto de condena. Los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria, bajo pena de nulidad.

ARTÍCULO 26.- En caso de allanamiento, desistimiento y transacción, antes de decretarse la apertura a prueba, los honorarios serán del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la escala del artículo 22. En los demás casos, se aplicará el CIENTO POR CIENTO (100%) de dicha escala.

En el caso de los peritos, si con posterioridad a la aceptación del cargo el proceso finalizara de modo anormal por cualquiera de las formas establecidas por las normas vigentes, los honorarios se regularán aplicando las siguientes pautas:

- a) si se hubiera presentado la pericia, se procederá según lo determinan los artículos 13, 22 y concordantes de la presente ley;
- b) si no se hubiera presentado la pericia, los jueces apreciarán la labor realizada en base al artículo 17 y dispondrán la regulación compensatoria adecuada. A tal efecto, requerirán al profesional interviniente el detalle de las tareas realizadas desde la aceptación del cargo hasta la fecha de la notificación de la finalización del proceso;
- c) en los casos de acuerdo de partes, habiéndose presentado la pericia contable, procederá la regulación de honorarios considerando como base regulatoria el monto de la demanda con actualización e intereses, siendo inoponible el acuerdo al perito que no intervino en el mismo.

ARTÍCULO 27.- Los honorarios del profesional de la parte que perdiere el juicio, se fijarán tomando como base la escala general, conforme a las pautas establecidas en el artículo 17.

ARTÍCULO 28.- Si en la transacción o conciliación se conviniera la entrega en especie de algún reclamo, el profesional a los efectos de su regulación de honorarios podrá ofrecer prueba sobre el valor de mercado del objeto de la prestación y se aplicará lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley.

ARTÍCULO 29.- Si en el pleito se hubieran acumulado acciones o deducido reconvención, se regularán por separado los honorarios que correspondan a cada una.

CAPÍTULO 3

Etapas procesales. División en etapas. Procesos ordinarios, sucesorios, concursos, procesos especiales, ejecución, procesos arbitrales y penales

ARTÍCULO 30.- Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se considerarán divididos en etapas.

Las etapas se dividirán del siguiente modo:

- a) la demanda y contestación en toda clase de juicios, escrito inicial en sucesiones y otros juicios semejantes, serán considerados como una tercera parte del juicio;
- b) las actuaciones de prueba en los juicios ordinarios y especiales, y las actuaciones realizadas hasta la resolución declaratoria de herederos inclusive, serán consideradas como otra tercera parte;
- c) las demás diligencias y trámites hasta la terminación del proceso en primera instancia, serán considerados como otra tercera parte del juicio. Los trabajos complementarios o posteriores a las etapas judiciales enumeradas precedentemente, deberán regularse en forma independiente y hasta una TERCERA PARTE (1/3) de la regulación principal;
- d) en los procesos arbitrales se aplicarán las pautas del artículo 17;
- e) los procesos penales, correccionales, contravencionales y de faltas, se considerarán divididos en dos etapas. La primera comprenderá la instrucción hasta su clausura y la segunda los demás trámites hasta la sentencia definitiva;
- f) en los juicios ejecutivos sin oposición de excepciones, se computará como UNA (1) sola etapa, desde la demanda hasta la sentencia. La segunda etapa se computará desde la sentencia de primera instancia hasta su conclusión; si se opusieren excepciones, se considerarán divididos en TRES (3) etapas: la primera desde la demanda hasta el planteo de excepciones y su contestación; la segunda, desde aquel acto procesal, hasta la sentencia; finalmente, la tercera etapa se computará desde la sentencia de primera instancia hasta su conclusión;
- g) los incidentes se dividirán en DOS (2) etapas; la primera se compone del planteo que lo origine, sea verbal o escrito, y la segunda, del desarrollo hasta su conclusión.

ARTÍCULO 31.- Por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia, se regularán en cada una de ellas del TREINTA POR CIENTO (30%) al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de la cantidad que se fije para honorarios en primera instancia.

Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el tribunal de alzada deberá adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de primera instancia, teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito y regulará seguidamente los honorarios que correspondan por las tareas cumplidas en la alzada.

Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus partes en favor del apelante, los honorarios profesionales por los trabajos en esa instancia de apelación, se fijarán entre el TREINTA POR CIENTO (30%) y el CUARENTA POR CIENTO (40%) de los correspondientes en primera instancia.

ARTÍCULO 32.- La interposición ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de los recursos extraordinarios, de inconstitucionalidad, de revisión, de casación, inaplicabilidad de Ley, ordinarios, directos y otros similares o que no sean los normales de acceso, no podrá remunerarse en una cantidad inferior a QUINCE (15) UMA. Las quejas por denegación de estos recursos no podrán remunerarse en una cantidad inferior a VEINTE (20) UMA. Si dichos recursos fueren concedidos y se tramitaren, se estará a lo dispuesto en el artículo 22.

CAPÍTULO 4

Forma de regular las etapas. Administrador judicial e interventor

ARTÍCULO 33.- Para la regulación de los honorarios del administrador judicial o interventor designado en juicios voluntarios, contenciosos y universales, se aplicarán las siguientes escalas:

- a) cuando los profesionales sean designados en juicios para actuar como administradores judiciales, interventores o veedores de personas físicas o jurídicas, de sucesiones, entes u organismos de cualquier objeto o naturaleza jurídica, se les regularán honorarios en una escala del DIEZ POR CIENTO (10%) al VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el monto total de los ingresos brutos habidos durante su desempeño o el valor de los bienes administrados, el que fuere mayor;
- b) cuando los profesionales sean designados en juicios para actuar como interventores recaudadores, sus honorarios serán regulados en una escala del DIEZ POR CIENTO (10%) al VEINTE POR CIENTO (20%), calculados sobre la recaudación efectuada;
- c) las funciones de liquidadores judiciales para los mismos casos que los citados para los administradores, serán remuneradas en una escala del DIEZ POR CIENTO (10%) al VEINTE POR CIENTO (20%), aplicada sobre el monto de los bienes liquidados;
- d) las funciones de árbitros, mediadores o amigables componedores o la de realización de pericias arbitrales, serán remuneradas en una escala del DIEZ POR CIENTO (10%) al VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el monto del litigio;

En las actividades regladas en este artículo, si la tarea del profesional requiere de atención diaria o implica un gasto diario y necesario, de monto fijo y carácter permanente, el auxiliar de justicia podrá solicitar que se le fije un monto retributivo de estos desembolsos, el que será deducido de la recaudación diaria de la actividad objeto de su tarea. Las bases regulatorias se encontrarán expresadas a valores de la fecha de la resolución regulatoria conforme las pautas del artículo 25 y concordantes.

ARTÍCULO 34.- En las causas penales, a los efectos de las regulaciones, deberá tenerse en cuenta:

- a) las reglas generales del artículo 17;
- b) la naturaleza del caso y la pena aplicable por el delito materia del proceso;
- c) la influencia que la sentencia tenga o pueda tener por si o con relación al derecho de las partes ulteriormente;
- d) la actuación profesional en las diligencias probatorias, así como la importancia, calidad y complejidad de las pruebas ofrecidas o producidas;
- e) en los demás casos, cuyo monto pueda apreciarse pecuniariamente, los honorarios profesionales se fijarán de conformidad con la escala del artículo 22, no pudiendo ser inferiores a los establecidos en el artículo 59. La acción indemnizatoria que se promoviese en el proceso penal, se regulará como si se tratara de un proceso ordinario en sede civil.

ARTÍCULO 35.- En los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, por lo actuado desde su iniciación hasta la sentencia, los honorarios del abogado o procurador serán calculados de acuerdo a la escala del artículo 22. No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un DIEZ POR CIENTO (10%) del que correspondiere regular.

ARTÍCULO 36.- En el proceso sucesorio, si UN (1) solo abogado patrocina o representa a todos los herederos o interesados, sus honorarios se regularán sobre el valor del patrimonio que se transmite, inclusive los gananciales, en la mitad del mínimo y del máximo de la escala establecida en el artículo 22.

También integrarán la base regulatoria los bienes existentes en otras jurisdicciones, dentro del país. En el caso de tramitarse más de UNA (1) sucesión en un mismo proceso, el monto será el del patrimonio transmitido en cada una de ellas.

Para establecer el valor de los bienes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 24.

Si constare en el expediente un valor por tasación, estimación o venta superior a la valuación fiscal, o la manifestación establecida en el inciso a) del artículo 24 de la presente ley, dicho valor será el considerado a los efectos de la regulación. En caso de que

intervengan varios abogados, se regularán los honorarios clasificándose los trabajos, debiendo determinar la regulación el carácter de común a cargo de la masa o particular a cargo del interesado. Los honorarios del abogado o abogados partidores en conjunto, se fijarán sobre el valor del haber a dividirse, aplicando una escala del DOS POR CIENTO (2%) al TRES POR CIENTO (3%) del total. Si se trata del auxiliar de justicia, los honorarios derivados de la actuación como perito partidor para realizar y suscribir las cuentas particionarias juntamente con el letrado, será regulada en una escala del DOS POR CIENTO (2%) al TRES POR CIENTO (3%) del valor de los bienes objeto de la partición.

ARTÍCULO 37.- En las causas de seguridad social los honorarios se regularán sobre el monto de las prestaciones debidas. Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la Parte General, Libro I, Título II, Capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado.

ARTÍCULO 38.- En las medidas cautelares, ya sean que éstas tramiten autónomamente, en forma incidental o dentro del proceso, los honorarios se regularán sobre el monto que se tiende a asegurar, aplicándose como base el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la escala del artículo 22; salvo casos de controversia u oposición, en que la base se elevará al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTÍCULO 39.- Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes comunes, se aplicará la escala del artículo 22. El monto de los honorarios se reducirá en un VEINTE POR CIENTO (20%) atendiendo al valor de los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 24 si fuere exclusivamente en beneficio del patrocinado, con relación a la cuota o parte defendida.

ARTÍCULO 40.- En los juicios de alimentos la base del cálculo de los honorarios será el importe correspondiente a DOS (2) años de la cuota que se fijare judicialmente.

En los casos de aumentos, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se tomará como base la diferencia que resulte del monto de la sentencia por el término de DOS (2) años, aplicándose la escala de los incidentes.

ARTÍCULO 41.- En los procesos de desalojo se fijarán los honorarios de acuerdo con la escala del artículo 22, tomando como base el total de los alquileres del contrato. En el caso que la locación a desalojar sea comercial, tal monto se reducirá en un VEINTE POR CIENTO (20%).

Si el profesional estimare inadecuado el alquiler fijado en el contrato o en caso que éste no pudiera determinarse exactamente o se tratase de juicios de intrusión o tenencia precaria, deberá fijarse el valor locativo actualizado del inmueble, para lo cual el profesional podrá acompañar tasaciones al respecto o designar perito para que lo determine, abonando los gastos de este último quien estuviere más lejos del monto de la tasación del valor locativo establecido. Tratándose de una homologación de convenio de desocupación y su ejecución, los honorarios se regularán en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del establecido en el párrafo primero.

ARTÍCULO 42.- En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la escala del artículo 22. No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un DIEZ POR CIENTO (10%) del que correspondiere regular. Las actuaciones posteriores a la ejecución propiamente dicha se regularán en un CUARENTA POR CIENTO (40%) de la escala del citado artículo.

ARTÍCULO 43.- En el caso del gestor del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o similar, de gestión útil por los trabajos del abogado o del procurador que beneficien a terceros acreedores o embargantes que concurren, los honorarios que correspondan regular se incrementarán en un CUATRO POR CIENTO (4%) calculados sobre los fondos que resulten disponibles en favor de aquéllos como consecuencia de su tarea.

ARTÍCULO 44.- En las causas laborales y complementarias tramitadas ante los tribunales de trabajo se aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente Ley, tanto en las etapas de los procedimientos contradictorios, como en las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las que intervenga como tribunal de alzada, según corresponda. En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerará como valor del juicio el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la última remuneración mensual normal y habitual que deba percibir según su categoría profesional por el término de DOS (2) años.

ARTÍCULO 45.- La interposición de acciones y peticiones de naturaleza administrativa seguirán las siguientes reglas:

a) demandas contencioso administrativas: se aplicarán los principios establecidos en los artículos 22 y 24 de la presente, si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria se aplicará la escala del primero de ellos;

b) actuaciones ante organismos de la Administración Pública, empresas del Estado, municipalidades, entes descentralizados, autárquicos, si tales procedimientos estuvieran reglados por normas especiales; en dichos casos, el profesional podrá solicitar regulación judicial de su labor, si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria, aplicándose el inciso a) del presente artículo, con una reducción del CINCUENTA POR CIENTO (50%).

En los casos en que los asuntos no sean susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior a SIETE (7) o CINCO (5) UMA, según se trate del ejercicio de acciones contencioso administrativas o actuaciones administrativas, respectivamente.

ARTÍCULO 46.- En la liquidación y disolución del régimen patrimonial del matrimonio se regularán honorarios al patrocinante o apoderado de cada parte conforme la escala del artículo 22 calculado sobre el patrimonio que se le adjudique a su patrocinado o representado.

ARTÍCULO 47.- En los juicios de escrituración y, en general, en los procesos derivados del contrato de compraventa de inmuebles, a los efectos de la regulación, se aplicará la norma del artículo 24, inciso a), salvo que resulte un monto mayor del boleto de compraventa, en cuyo caso se aplicará este último.

ARTÍCULO 48.- Los incidentes y tercerías, ya sea que éstas tramiten autónomamente o dentro de un mismo juicio o expediente, serán considerados por separado del juicio principal. Los honorarios se regularán entre el OCHO POR CIENTO (8%) y el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de lo que correspondiere al proceso principal, no pudiendo ser inferiores a CINCO (5) UMA.

ARTÍCULO 49.- Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, de hábeas data, de hábeas corpus, en caso que no puedan regularse de conformidad con la escala del artículo 22, se aplicarán las normas del artículo 17, con un mínimo de VEINTE (20) UMA.

ARTÍCULO 50.- En las acciones sobre derechos de incidencia colectiva con contenido patrimonial, los honorarios serán los que resulten de la aplicación del artículo 22, reducidos en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

ARTÍCULO 51.- Los honorarios por diligenciamiento de exhortos u oficios contemplados en la Ley N° 22.172 serán regulados de conformidad a las siguientes pautas:

a) si se tratare de notificaciones o actos semejantes, los honorarios no podrán ser inferiores a TRES (3) UMA;

b) si se solicitaren inscripciones de dominios, hijuelas, testamentos, gravámenes, secuestros, embargos, inhibiciones, inventarios, remates, desalojos, o cualquier otro acto registral, los honorarios se regularán en una escala entre DIEZ (10) y VEINTE (20) UMA. En los casos de designaciones de auxiliares de la justicia ante rogatorias u oficios provenientes de otra jurisdicción y a los efectos de poder establecer la base regulatoria de los honorarios por ante el juez oficiado, se deberá acompañar copia de la demanda, y de la reconvención, si la hubiera;

c) si se tratare de diligencias de prueba y se hubiera intervenido en su producción o contralor, el juez exhortado regulará los honorarios proporcionalmente a la labor desarrollada, en una escala entre SIETE (7) y TREINTA (30) UMA.

ARTÍCULO 52.- La regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en pesos o moneda de curso legal y la cantidad de UMA que éste representa a la fecha de la resolución. El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de pesos o moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago.

TÍTULO IV

Del procedimiento para regular honorarios

ARTÍCULO 53.- Aun sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regularán los honorarios respectivos de los abogados y procuradores de las partes y de los auxiliares de justicia. A los efectos de la regulación del monto se tendrán en cuenta los intereses, los frutos y los accesorios, que integrarán la base regulatoria según lo establecido en los artículos 23, 24 y 25.

ARTÍCULO 54.- Los profesionales, al momento de solicitar su regulación de honorarios, podrán formular su estimación, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que consideren computables. Se correrá traslado de la estimación por el término de CINCO (5) días a quienes pudieran estar obligados al pago.

La petición de regulación provisoria efectuada en la oportunidad prevista en el artículo 13 y la resolución que decreta el diferimiento de la regulación definitiva a que hace referencia el artículo 24, inciso a), parte final, provocarán la suspensión de los términos de prescripción previstos en los artículos 2558 y 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, reanudándose los términos desde la notificación de la sentencia a los profesionales de cuyos honorarios hubiera sido diferida la regulación, o ésta haya sido provisoria.

ARTÍCULO 55.- Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los DIEZ (10) días de quedar firme la resolución regulatoria.

Los honorarios extrajudiciales se abonarán dentro de los DIEZ (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado deberán serle notificados al domicilio real o al constituido al efecto.

La acción por cobro de honorarios, regulados judicialmente, tramitará por la vía de ejecución de sentencia. En ningún caso, abonará tasa de justicia, ni estará sujeta a ningún tipo de contribución.

Los honorarios deberán siempre pagarse en moneda de curso legal.

ARTÍCULO 56.- Para la determinación judicial de honorarios por trabajos extrajudiciales, si el profesional los solicitare, se tendrá en cuenta la escala del artículo 22. En ningún caso los honorarios a regularse podrán ser inferiores al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo que correspondería judicialmente según la pauta del presente. El profesional deberá acreditar la labor desarrollada, acompañando la prueba de la que intente valerse, acreditando la importancia de su labor y el monto en cuestión, de lo cual se notificará a la otra parte por el término de CINCO (5) días. De no mediar oposición sobre el trabajo realizado, el juez fijará sin más trámite los honorarios que correspondan; si la hubiere, la cuestión tramitará según las normas aplicables a los incidentes.

Dichas actuaciones no abonarán tasa de justicia, sellado, ni impuesto alguno, por parte del profesional actuante.

ARTÍCULO 57.- Las resoluciones que regulen honorarios deberán ser notificados a sus beneficiarios y a los obligados al pago, personalmente, por cédula, telegrama o cualquier otro medio previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Serán apelables en el término de CINCO (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso.

En caso de apelación de honorarios, serán de aplicación las disposiciones del artículo 244 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La Cámara de Apelaciones respectiva deberá resolver el recurso dentro de los TREINTA (30) días de recibido el expediente.

Los honorarios serán materia de apelación con prescindencia del monto de los mismos.

En el caso que la regulación forme parte de la sentencia definitiva, en la notificación se deberá acompañar copia íntegra de la misma bajo pena de nulidad de la notificación.

ARTÍCULO 58.- Si el condenado en costas no abonare los honorarios profesionales en tiempo y forma, el profesional podrá requerir su pago a su cliente, luego de TREINTA (30) días corridos del incumplimiento y siempre que esté debidamente notificado.

ARTÍCULO 59.- El mínimo establecido para regular honorarios de juicios susceptibles de apreciación pecuniaria que no estuviesen previstos en otros artículos será el siguiente:

- a) en los procesos de conocimiento, de DIEZ (10) UMA;
- b) en los ejecutivos, de SEIS (6) UMA;
- c) en los procesos de mediación, de DOS (2) UMA;
- d) en el caso de auxiliares de la justicia, de CUATRO (4) UMA.

TÍTULO V

Honorarios de auxiliares de la justicia

ARTÍCULO 60.- Serán considerados auxiliares de la justicia en los términos de esta Ley a aquellos que, por su arte y profesión, aporten sus conocimientos en procura del mejor desarrollo del marco probatorio del proceso o realicen cualquier otra labor dispuesta en el proceso, en los roles previstos por las leyes y con los alcances que surjan de las mismas y de la resolución que los designe. Serán de aplicación las siguientes normas:

- a) los aranceles establecidos en el presente régimen se refieren únicamente a la retribución por honorarios del servicio profesional prestado, no así a los diversos gastos originados en el desempeño de la gestión. Para atender a estos últimos, el profesional tendrá derecho a solicitar que se le anticipen fondos dentro del tercer día de la aceptación del cargo. Deberá fundamentar su necesidad y estimar su monto;
- b) si la tarea a realizar fuera de gran magnitud, el profesional podrá utilizar la colaboración de auxiliares ad hoc, previa autorización judicial;
- c) en los supuestos de los incisos a) y b), los gastos le serán anticipados al experto antes de la realización de la tarea encomendada, por la parte que solicitó la pericia, bajo pena de considerarse desistida la prueba;
- d) si se solicitare al auxiliar de justicia trabajos que no formen parte de la labor principal requerida, el juez fijará, además de los honorarios devengados por el trabajo principal, una remuneración adicional por la tarea anexa, ateniéndose a lo previsto en los artículos 13, 22 y concordantes;
- e) las sentencias regulatorias de honorarios comprenderán las tareas realizadas hasta la fecha de su dictado. Las eventuales tareas profesionales posteriores a la fecha de la sentencia serán objeto de una nueva regulación de honorarios según lo previsto en los artículos 13, 22 y concordantes;
- f) la resolución judicial que tuviera una relación directa o indirecta con la gestión del auxiliar de justicia le será notificada por cédula y con copia;
- g) las cuestiones derivadas de actuaciones judiciales que no se encuentren expresamente resueltas, serán resueltas por aplicación de

principios análogos de las materias afines a la presente Ley y, si ello no fuere posible, por extensión de las disposiciones normativas procesales en cada uno de los fueros judiciales;

h) en aquellos casos en que las costas sean impuestas a quien cuente con el beneficio de litigar sin gastos, los peritos podrán reclamar la totalidad de sus honorarios a la parte no condenada en costas, independientemente del derecho que tenga esta de repetir contra la obligada al pago. Previamente, deberán intimar el pago al condenado en costas;

i) en el desempeño de su actuación como auxiliares de la justicia, los profesionales serán asimilados a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardárseles;

j) en aquellos casos en los que las tareas correspondientes a administradores judiciales, interventores, liquidadores judiciales, liquidador de averías y siniestros y partidor en juicios sucesorios se prolongaran por más de TRES (3) meses, el auxiliar podrá solicitar se regulen honorarios provisorios por las tareas realizadas en ese lapso

ARTÍCULO 61.- En los procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria, los honorarios de los peritos y de los peritos liquidadores de averías serán fijados conforme a las pautas valorativas del artículo 17 y en un mínimo de SEIS (6) UMA, entendiéndose por la fijación de los honorarios mínimos, la aceptación del cargo instituido. En el caso de los demás auxiliares de la justicia, se aplicarán las normas específicas.

ARTÍCULO 62.- En los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, los honorarios del perito y del perito liquidador de averías serán fijados conforme lo establece el artículo 33. Para tales casos los honorarios mínimos a regular alcanzan a SEIS (6) UMA. En el caso de los demás auxiliares de la justiciase aplicarán las normas específicas.

ARTÍCULO 63.- A los efectos de la presente Ley, ninguna persona, sea humana o jurídica, podrá usar las denominaciones "estudio jurídico", "consultorio jurídico", "asesoría jurídica" u otras similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su dirección.

Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse, de oficio o a simple requerimiento de la institución que en la jurisdicción respectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula, la clausura del local o una multa de TREINTA (30) UMA que pesará solidariamente sobre los infractores, y será destinada a los fondos de dicha institución.

ARTÍCULO 64.- Sustitúyense los artículos 253 y 257 de la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras que quedarán redactados de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 253.- Síndico. Designación. La designación del síndico se realiza según el siguiente procedimiento:

1) Podrán inscribirse para aspirar a actuar como síndicos concursales los contadores públicos o abogados, con una antigüedad mínima en la matrícula de CINCO (5) años; y estudios de contadores o abogados que cuenten entre sus miembros con mayoría de profesionales con un mínimo de CINCO (5) años de antigüedad en la matrícula. Los integrantes de los estudios al tiempo de la inscripción no pueden a su vez inscribirse como profesionales independientes. Se tomarán en cuenta los antecedentes profesionales y académicos, experiencia en el ejercicio de la sindicatura, y se otorgará preferencia a quienes posean títulos universitarios de especialización en sindicatura concursal, agrupando a los candidatos de acuerdo a todos estos antecedentes.

2) Cada 4 años la Cámara de Apelación correspondiente forma DOS (2) listas, la primera de ellas correspondientes a la categoría A, integrada por estudios, y la segunda, categoría B, integrada exclusivamente por profesionales; en conjunto deben contener una cantidad no inferior a QUINCE (15) síndicos por Juzgado, con DIEZ (10) suplentes, los que pueden ser reinscriptos indefinidamente. Para integrar las categorías se tendrán en cuenta los antecedentes y experiencia, otorgando prioridad a quienes acrediten haber cursado carreras universitarias de especialización de postgrado. Para integrar las categorías se tomarán en cuenta las pautas indicadas en el último párrafo del inciso anterior.

3) La Cámara puede prescindir de las categorías a que se refiere el inciso anterior en los juzgados con competencia sobre territorio cuya población fuere inferior a DOSCIENTOS MIL (200.000) habitantes de acuerdo al último censo nacional de población y vivienda.

También puede ampliar o reducir el número de síndicos titulares por juzgado.

4) Las designaciones a realizar dentro los CUATRO (4) años referidos se efectúan por el juez, por sorteo, computándose separadamente los concursos preventivos y las quiebras.

5) El sorteo será público y se hará entre los integrantes de una de las listas, de acuerdo a la complejidad y magnitud del concurso de que se trate, clasificando los procesos en A y B. La decisión la adopta el juez en el auto de apertura del concurso o de declaración de quiebra. La decisión es inapelable.

6) El designado sale de la lista hasta tanto hayan actuado todos los candidatos.

7) El síndico designado en un concurso preventivo actúa en la quiebra que se decreta como consecuencia de la frustración del concurso, pero no en la que se decreta como consecuencia del incumplimiento del acuerdo preventivo.

8) Los suplentes se incorporan a la lista de titulares cuando uno de éstos cesa en sus funciones.

9) Los suplentes actúan también durante las licencias. En este supuesto cesan cuando éstas concluyen.

Sindicatura plural. El juez puede designar más de UN (1) síndico cuando lo requiera el volumen y complejidad del proceso, mediante resolución fundada que también contenga el régimen de coordinación de la sindicatura. Igualmente podrá integrar pluralmente una sindicatura originariamente individual, incorporando síndicos de la misma u otra categoría, cuando por el conocimiento posterior relativo a la complejidad o magnitud del proceso, advirtiera que el mismo debía ser calificado en otra categoría de mayor complejidad.”

“ARTÍCULO 257.- Asesoramiento profesional. En su desempeño y según cual fuere su profesión, el síndico actuará con patrocinio obligatorio de abogado o asesoramiento de contador público. En todos los casos, los honorarios de los profesionales serán abonados por el concurso.”

ARTÍCULO 65.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación y se aplicará a los procesos en curso en los que no haya regulación firme de honorarios.

ARTÍCULO 66.- Deróganse la Ley N° 21.839, y su modificatoria, y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 67.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino. – Marcelo J. Fuentes.-
Migue Á. Pichetto. –

FUNDAMENTOS

Señor Presidente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de impulsar un proyecto de ley tendiente a regular los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.

El debate sobre el sistema judicial y su estructura ocupa un lugar destacado en las actuales discusiones sobre el funcionamiento de nuestras instituciones republicanas. Un actor fundamental de dicho sistema es el profesional del derecho. El respeto hacia éste interesa tanto al buen orden procesal como a la sociedad en la que el abogado se desempeña, si se busca que cada litigante obtenga, mediante el proceso, la solución justa que quepa a su derecho. En tal sentido, la labor del profesional del derecho tiene una finalidad superior y es atinente a la paz social a la que él coadyuva al hacer un ejercicio ético de su función.

En el artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley N° 23.187, reguladora del

ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal, se establece que "La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que la menoscabe o restrinja."

En oportunidad de la sanción de la norma que incluye al precepto arriba transcrito, se omitió considerar que regía la Ley N° 21.839, vigente desde el 20 de julio de 1978, durante la dictadura militar. Esta última, que aún regula los aranceles y honorarios de abogados y procuradores, agravia la libertad y la dignidad de estos profesionales, razón por la cual los distintos estamentos involucrados se pronunciaron en su contra, aduciendo que no contemplaba los intereses de los profesionales del derecho. Por cierto, el poder dictatorial de entonces desoyó las críticas.

La situación impuesta por la norma de la dictadura empeoró en 1991, cuando el Decreto N° 2284 de fecha 31 de octubre de 1991 dispuso dejar sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, comisiones o cualquier otra forma de retribución de servicios profesionales establecidos, aprobados u homologados por leyes, decretos o resoluciones.

En el caso específico de los profesionales del derecho, lo dispuesto por ese Decreto se perfeccionó en 1994, mediante la Ley N° 24.432 que, entre otras normas, modificó la Ley N° 21.839, eliminando su carácter de orden público.

En virtud de estos antecedentes, la norma que se propone a través de este proyecto busca dignificar la profesión de los abogados y los procuradores a través de disposiciones que limiten la discrecionalidad judicial para regular honorarios, determinen mínimos arancelarios, restablezcan la calidad de orden público para la ley que regule los honorarios y aranceles que perciban los profesionales del derecho y aseguren a los matriculados la obtención de una recompensa justa y equitativa por el ejercicio de su labor profesional.

En pos de tales objetivos, las normas que conforman este proyecto de ley disponen, entre otras, las cuestiones que se describen en los siguientes párrafos.

Los honorarios del profesional del derecho son considerados alimentarios, inembargables, tal como lo reconoce la jurisprudencia nacional, y de pertenencia exclusiva de quien los hubiera devengado. Se establecen las reglas a cumplir al celebrar convenios y pactar honorarios, como así también las consecuencias derivadas de una eventual revocación del mandato o patrocinio o de la renuncia del

profesional en la causa.

Se dispone que se pueden celebrar pactos de cuotalitis y convenios de honorarios en causas previsionales y en asuntos que involucren cuestiones de alimentos y menores de edad, estableciendo para tales casos un tope del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto a percibir por el demandante. Esta disposición entiende que no existen motivos para prohibir tales pactos, máxime cuando existe la costumbre de celebrarlos por conveniencia de los propios clientes que supeditan el pago de los honorarios al efectivo cobro de las acreencias que reclaman.

El proyecto establece que el cobro de honorarios en forma judicial, sean éstos convenidos, regulados judicialmente o extrajudiciales, no devengará tasa de justicia ni sellado alguno. En este sentido se prevé que el pago de los honorarios profesionales es condición ineludible para dar por concluido un proceso o hacer lugar a una medida cautelar reclamada. En principio, el pago de los honorarios pesa solidariamente sobre los condenados en costas u obligados a satisfacerlos.

En caso de cambio de patrocinio y representación, el proyecto estipula que el profesional desplazado adquiere la calidad de parte para actuar en la protección de sus derechos a la regulación de honorarios. Esta innovación permitirá que el profesional continúe interviniendo en el proceso; aunque exclusivamente en lo atinente al monto en discusión y al cobro de sus honorarios, pudiendo efectuar, de ser necesario, las peticiones que estime pertinentes para preservar sus derechos.

Se establece la aplicación de una Unidad de Medida Arancelaria (UMA), equivalente al UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) de la remuneración total asignada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, para determinar los honorarios mínimos en asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria y que regirá tanto para la actividad judicial como para la extrajudicial. Cabe aclarar que la fijación de la UMA se inspira en el buen resultado de la Ley N° 8904 de la Provincia de BUENOS AIRES que instituye un mecanismo similar denominado "JUS" para calcular los honorarios profesionales.

Los intereses deberán siempre integrarla base regulatoria de los honorarios, bajo sanción de nulidad. Los honorarios deberán abonarse dentro de los DIEZ (10) días de quedar firme la regulación.

Es menester señalar que la Sala "B" de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL en los autos caratulados "SILVESTRI, Hilda Rosa c/ SILVA, Elvio s/desalojo por vencimiento de contrato", pronunciamiento de fecha 28 de junio de 2011 (LL 2011-D:446), modificó una regulación de honorarios en favor de un abogado al considerar que los mismos habían sido calculados

de una manera muy exigua. El tribunal fundó la medida en el Protocolo de Regulación elaborado por la Comisión de Honorarios y Aranceles del COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL con fundamento en el principio de equidad.

Los jueces, al tomar la medida, hicieron hincapié en que la última reforma arancelaria fue sancionada en enero de 1995 y remarcaron que desde aquella época el salario básico de un magistrado de primera instancia se incrementó en el orden de un CUATROCIENTOS QUINCE COMA VEINTINUEVE POR CIENTO (415,29%). Según el fallo, corresponde que el abogado reciba una retribución acorde no sólo a su desempeño, sino a las obligaciones involucradas en su que hacer. En ese contexto, se señaló que “en virtud del principio de equidad, tomando como pauta indiciaria los arts. 6, 13 y cc.de la ley de arancel y el Protocolo de Regulación elaborado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, llevan a este Tribunal a considerar reducido el monto fijado como mínimo arancelario.”

Asimismo, el proyecto incorpora reformas puntuales al régimen de concursos y quiebras (Ley N° 24.522, artículos 253 y 257), a efectos de establecer la sindicatura mixta y de este modo habilitar para el ejercicio de esa función no sólo a contadores y estudios contables, sino también a abogados y estudios jurídicos, en línea con las previsiones normativas de marcos jurídicos anteriores al vigente actualmente.

En aquel sentido, el proyecto que se acompaña busca la sanción de una nueva Ley de Honorarios Profesionales que resulte integral para los abogados, procuradores y auxiliares de la justicia, que introduzca como un aspecto fundamental el carácter alimentario de los honorarios que reciben los profesionales aludidos por su trabajo, y el carácter de orden público de las normas que lo regulan, ello con miras a evitar la discrecionalidad de los magistrados al momento de las regulaciones correspondientes.

Con dicha finalidad, se somete a vuestra consideración el proyecto de ley adjunto que responde al propósito enunciado y que permite, de acuerdo a lo expresado, mejorar las condiciones en las que abogados, procuradores y auxiliares de la justicia realizan sus tareas.

Por los fundamentos precedentemente expresados, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.

Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino. – Marcelo J. Fuentes.-
Migue Á. Pichetto. –

Incluye firma la Señora Senadora Ada R. del Valle Itúrriz de Cappellini.-

